

Los Derechos del pueblo romaní en estado de crisis, declaran 33 organizaciones de derechos humanos.

Bruselas, 9 de junio de 2026: Una coalición de activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil advirtió hoy sobre los ataques sistemáticos contra la mayor minoría étnica de Europa en medio del auge del fascismo, la securitización y el desmantelamiento del orden basado en el estado de derecho. La Red de Derechos del Pueblo Romaní, una coalición de 33 organizaciones miembros de 21 países europeos, declaró hoy que la situación de los derechos humanos del pueblo romaní ha entrado en un estado de crisis aguda. Esta declaración conjunta se produce tras la reunión anual de la Red de Derechos del Pueblo Romaní en París, donde los miembros evaluaron un panorama que se deteriora rápidamente, caracterizado por el auge de la extrema derecha, la erosión de la democracia y la eliminación sistemática de las protecciones para las minorías racializadas.

Las personas expertas en derechos humanos afirman que la persecución del pueblo romaní ya no es una cuestión de fracaso o negligencia política, sino un proyecto político deliberado que ha provocado que la securitización de las comunidades romaníes se acelere en poco tiempo. En Hungría se toleran las manifestaciones políticas anti-romaníes y los grupos paramilitares. En Grecia, se llevan a cabo semanalmente perfiles étnicos masivos y redadas policiales militarizadas. En Italia, se han aprobado leyes de seguridad contra la población romaní que criminalizan la maternidad. En Eslovenia, la legislación contra la población romaní permite la vigilancia masiva y las redadas policiales en comunidades enteras.

En todo el continente, las personas romaníes son cada vez más percibidas no como ciudadanos/as con derechos, sino como una amenaza para la seguridad interna. Esto se ve agravado por un esfuerzo coordinado para deslegitimar a la sociedad civil y dejar de financiar estratégicamente los movimientos antirracistas, ya que los gobiernos priorizan el gasto militar sobre el bienestar social.

Simultáneamente, el cambio de un marco de obligaciones estatales a uno que vincula falsamente los derechos con las "responsabilidades" ha socavado los fundamentos mismos de los derechos humanos. Derechos y responsabilidades no son interdependientes; toda persona posee derechos inherentes independientemente de su capacidad para "integrarse" o cumplir con los deberes definidos por el Estado; del mismo modo, todo ciudadano tiene responsabilidades independientes de sus derechos. Al confundir ambos conceptos, los actores políticos han utilizado el lenguaje de la responsabilidad para justificar la eliminación de mandatos legales específicos y la financiación destinada a la

población romaní. Junto con la «integración» política de las estrategias de derechos —que diluye las protecciones específicas en objetivos sociales genéricos—, este enfoque ha invisibilizado a la población romaní en las políticas públicas. Con el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, que amenaza con eliminar el apoyo específico para la igualdad de la población romaní, la UE corre el riesgo de abandonar a sus ciudadanos más vulnerables a merced de gobiernos nacionalistas.

«Estamos presenciando un desmantelamiento deliberado de las protecciones que antes amparaban a los más vulnerables», declaró Đorđe Jovanović, presidente del Centro Europeo de Derechos de la Población Romaní, que coordina la Red de Derechos de la Población Romaní. “La idea de que las personas romaníes deben «ganarse sus derechos» mediante la «integración» es falsa y se utiliza para justificar su exclusión. La securitización de nuestras comunidades y la retirada de fondos a nuestros defensores son decisiones estratégicas, no errores políticos accidentales, de gobiernos que han adoptado la exclusión. No aceptaremos una Europa donde la ciudadanía esté condicionada a la etnia. Nuestra lucha es por la universalidad de los derechos humanos, y seguiremos exigiendo responsabilidades a estos gobiernos, independientemente del coste político”.

La Red de Derechos Romaníes insta a las instituciones de la UE, a los Estados miembros y a los donantes internacionales a:

- **Poner fin a la securitización:** Derogar la legislación que criminaliza a las comunidades romaníes y detener el uso de tácticas militares contra la población civil.
- **Proteger a la sociedad civil:** Garantizar la financiación sostenible para los/las activistas antirracistas y salvaguardar el espacio de actuación de los defensores de los derechos humanos.
- **Exigir rendición de cuentas:** Investigar y enjuiciar los delitos de odio y la discriminación patrocinada por el Estado, incluidas las acciones de los grupos de odio que operan con impunidad.
- **Preservar la especificidad:** Mantener objetivos explícitos de igualdad para el pueblo romaní y financiación específica en el presupuesto de la UE posterior a 2030, rechazando la desaparición de los derechos incluyéndolos en objetivos genéricos de "inclusión social".

El ataque a los derechos del pueblo romaní es un preludio a la erosión de los derechos de todas las personas. La Red de Derechos del Pueblo Romaní se mantiene unida en su compromiso de defender la universalidad de los derechos humanos y el estado de derecho.

La Red de Derechos del Pueblo Romaní fue impulsada por el Centro Europeo de Derechos del Pueblo Romaní en 2022. Reúne a activistas romaníes y no romaníes comprometidos con la defensa de los derechos humanos del pueblo romaní y de

otras personas víctimas del antigitanismo en toda Europa. Actualmente, la Red cuenta con 33 organizaciones miembros en 21 países.

La reunión anual tuvo lugar en París del 26 al 28 de mayo de 2026.

Para más información o para concertar una entrevista, contacte con:

Jonathan Lee

Director de Incidencia Política y Comunicación

Centro Europeo de Derechos del Pueblo Gitano

jonathan.lee@errc.org

+32 49 288 7679